



Asamblea General

Distr. general
14 de octubre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

Opinión núm. 34/2020, relativa a Abdullah Awad Salim al-Shamsi (Emiratos Árabes Unidos)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 9 de diciembre de 2019 al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos una comunicación relativa a Abdullah Awad Salim al-Shamsi. El Gobierno respondió a la comunicación el 28 de enero de 2020. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Abdullah Awad Salim al-Shamsi es un ciudadano de Omán nacido en 1998. Cuando fue arrestado, el Sr. Al-Shamsi cursaba estudios de educación secundaria en los Emiratos Árabes Unidos. Su domicilio habitual se encuentra en el distrito de Al-Ain, en Abu Dabi.

a. Arresto y detención

5. La fuente informa de que el 18 de agosto de 2018, a las 11.00 horas, el Sr. Al-Shamsi regresaba de la zona industrial de Abu Dabi a su domicilio, situado en el distrito de Al-Ain, cuando fue arrestado por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en la carretera situada junto a Green Mubazzarah, en el distrito mencionado. Los agentes no le mostraron una orden judicial.

6. Según la fuente, el 19 de agosto de 2018 los padres del Sr. Al-Shamsi denunciaron su desaparición en la comisaría de policía de Zakhir, situada en el distrito de Al-Ain, donde se les comunicó que la policía desconocía su paradero. Ese mismo día, los padres del Sr. Al-Shamsi notificaron el arresto a la Embajada de Omán en Abu Dabi, pero las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no permitieron al personal de la Embajada visitar al Sr. Al-Shamsi y desde entonces han denegado esa posibilidad.

7. La fuente sostiene que, después del arresto, el Sr. Al-Shamsi fue conducido a un centro de detención secreto y permaneció incomunicado en régimen de aislamiento durante los seis primeros meses de su detención. La sala en la que fue recluido no tenía ventanas, y el Sr. Al-Shamsi no pudo averiguar dónde se encontraba; ignora si se trataba o no de un lugar subterráneo.

8. Según la fuente, un mes después de que se arrestara al Sr. Al-Shamsi, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de sus padres y aislaron por la fuerza a la familia en una habitación mientras registraban el resto de la vivienda, de donde se llevaron un viejo teléfono móvil y la computadora portátil del estudiante. Aproximadamente al mismo tiempo, el tío del Sr. Al-Shamsi fue detenido en relación con el arresto de su sobrino un mes antes. El tío del Sr. Al-Shamsi, que lleva más de diez años trabajando en Qatar, fue acusado de “intercambiar información con el Estado de Qatar”. Su juicio comenzó el 30 de octubre de 2019.

9. La fuente informa de que, durante los tres primeros meses de su detención, el Sr. Al-Shamsi fue torturado por miembros de la seguridad del Estado, que le propinaron palizas, lo hostigaron, lo amenazaron, le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron las uñas, le denegaron alimentos y le impidieron dormir durante períodos prolongados. Supuestamente, con esas torturas se lo quería obligar a confesar que había trabajado con su tío para Qatar y en detrimento de los Emiratos Árabes Unidos. En relación con esa acusación, las autoridades también han alegado oficiosamente que el tío del Sr. Al-Shamsi le proporcionaba fondos. Sin embargo, la fuente indica que se trata de una invención, puesto que la relación entre la familia del Sr. Al-Shamsi y su tío se rompió hace muchos años.

10. A la luz de lo señalado, la fuente aduce que las autoridades eligieron al Sr. Al-Shamsi para obligarlo a confesar e incriminar a su tío. Esto resulta particularmente preocupante porque, durante la primera audiencia del juicio de su tío, el 30 de octubre de 2019, el fiscal declaró que el Sr. Al-Shamsi había confesado e incriminado a ambos.

11. La fuente informa de que, a principios de febrero de 2019, el Sr. Al-Shamsi fue trasladado a la prisión de Al-Wathba, en Abu Dabi. Desde entonces, sus padres han podido visitarlo todos los jueves, pero no ha podido reunirse con un abogado porque todavía no ha

sido enviado a juicio y no está claro que se lo haya acusado formalmente. La Fiscalía del Estado ha prorrogado con regularidad la detención del Sr. Al-Shamsi sin proporcionar ningún fundamento jurídico para ello ni ofrecerle la posibilidad de impugnar su privación de libertad.

12. Según la fuente, el Sr. Al-Shamsi tiene un tumor maligno en el riñón que aún le queda. Años antes de ser arrestado, se le extirpó el otro riñón y fue tratado contra el cáncer. En aquella época no podía acudir a la escuela, por lo que continuó sus estudios en casa durante el prolongado tratamiento. El Sr. Al-Shamsi también tiene un trastorno psiquiátrico y ha sido visto por médicos de la prisión. Sin embargo, su estado ha empeorado recientemente. Según parece, ha sido sometido a “sesiones de hipnosis” en el hospital médico de Khalifa, aunque no está claro para qué fin o con qué métodos.

b. Análisis de las violaciones

i. Categoría I

13. La fuente sostiene que, el 18 de agosto de 2018, el Sr. Al-Shamsi fue arrestado sin orden judicial cuando regresaba de la zona industrial de Abu Dabi a su domicilio, situado en el distrito de Al-Ain. No se le expuso ningún motivo para su arresto y no parece que, dadas las circunstancias, hubiera motivos razonables para arrestarlo en flagrante delito. En consecuencia, la detención del Sr. Al-Shamsi no se fundó en la ley, en violación de sus derechos amparados por los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y el artículo 14, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

14. Según la fuente, durante los seis primeros meses de su detención, el Sr. Al-Shamsi fue objeto de una desaparición forzada y supuestamente no se le informó de los cargos que se le imputaban, por lo que se conculcó su derecho a ser informado sin demora de los motivos de la detención y de las acusaciones formuladas en su contra, reconocido en el artículo 99 de la Ley Federal núm. 35 de 1992, relativa al Código de Procedimiento Penal (“Código de Procedimiento Penal”), la directriz 17 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), el principio 10 del Conjunto de Principios y el artículo 14, párrafo 3, de la Carta Árabe de Derechos Humanos. No está claro si el Sr. Al-Shamsi ya ha sido acusado formalmente.

15. La fuente recuerda que la desaparición forzada es una forma manifiesta de detención arbitraria. Por lo tanto, el período durante el cual el Sr. Al-Shamsi permaneció desaparecido por la fuerza constituyó una violación de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, amparado por el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 22 de la Carta Árabe de Derechos Humanos. La desaparición forzada del Sr. Al-Shamsi también infringió los artículos 26 y 28 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos, que consagran el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.

16. La fuente alega que, al sustraerlo del amparo de la ley, la desaparición forzada del Sr. Al-Shamsi lo privó de sus salvaguardias legales como detenido, que incluyen el derecho de *habeas corpus* y el derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial, por lo que se vulneraron los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 14, párrafo 6, y 22 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios y los principios 8 y 10 de los Principios y Directrices Básicos. Además, la desaparición forzada del Sr. Al-Shamsi lo privó de su derecho a presentar una reclamación por la prolongación de su detención más allá del período legal de 7 días, renovable por otro período no superior a 14 días, en virtud del artículo 110 del Código de Procedimiento Penal.

17. A la luz de lo que antecede, la fuente sostiene que la detención del Sr. Al-Shamsi es arbitraria con arreglo a la categoría I.

ii. Categoría III

18. La fuente sostiene, además, que la detención del Sr. Al-Shamsi es arbitraria debido a las graves vulneraciones de su derecho a un juicio con las debidas garantías.

19. La fuente señala que, a pesar de su prolongada detención, el Sr. Al-Shamsi sigue sin poder reunirse con un abogado y no se le ha facilitado el acceso al expediente sumarial. Por otro lado, la fuente cree que no se le ha informado formalmente de los cargos que se le imputan. La fuente considera que ese hecho constituye una violación del derecho del Sr. Al-Shamsi a la asistencia letrada durante la fase de investigación judicial, consagrado en el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, además de vulnerar la esencia del derecho a la asistencia letrada, la preparación de la defensa y la igualdad de medios, garantizado en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos y el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos. Asimismo, la desaparición forzada inicial del Sr. Al-Shamsi quebrantó intrínsecamente la esencia del derecho a la asistencia letrada, la preparación de la defensa y la libre comunicación con un abogado, reconocido por el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

20. Según la fuente, a pesar de los esfuerzos realizados por la Embajada de Omán, se negó al Sr. Al-Shamsi su derecho a tener acceso a la asistencia consular, consagrado en el artículo 36, párrafo 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

21. La fuente alega que el Sr. Al-Shamsi fue objeto de una desaparición forzada y recluido en régimen de aislamiento durante los seis primeros meses de su detención. Además, el Sr. Al-Shamsi fue sometido a otras torturas, puesto que le propinaron palizas, lo hostigaron, lo amenazaron, le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron las uñas, le denegaron alimentos y le impidieron dormir durante períodos prolongados. El uso de la tortura contraviene la prohibición absoluta de la tortura, consagrada en los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 6 del Conjunto de Principios. También incumple el artículo 8 de la Carta Árabe de Derechos Humanos y el artículo 26 de la Constitución.

22. La fuente sostiene que el objetivo de las torturas era obligar al Sr. Al-Shamsi a confesar que había trabajado con su tío para Qatar y en detrimento de los Emiratos Árabes Unidos. En la primera audiencia del juicio de su tío, el fiscal señaló a este que el Sr. Al-Shamsi había hecho confesiones que incriminaban a ambos. Por lo tanto, existe un gran riesgo de que las confesiones extraídas al Sr. Al-Shamsi mediante tortura sean utilizadas como prueba en los procedimientos judiciales contra el Sr. Al-Shamsi y su tío, en violación del artículo 15 de la Convención contra la Tortura y de la directriz 12 de los Principios y Directrices Básicos.

23. La fuente sostiene que, además, la desaparición forzada posibilita la tortura y constituye una forma de tortura en sí misma, tanto en relación con la persona desaparecida como con sus familiares¹. Por lo tanto, al someter al Sr. Al-Shamsi a una desaparición forzada, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos incumplieron las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención contra la Tortura.

Respuesta del Gobierno

24. El 9 de diciembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno mediante su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que, a más tardar el 7 de febrero de 2020, facilitara información detallada sobre la situación del Sr. Al-Shamsi y las observaciones que estimara oportunas sobre las alegaciones de la fuente. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Al-Shamsi.

¹ La fuente se remite a *Hernández Colmenarez y Guerrero Sánchez c. la República Bolivariana de Venezuela* (CAT/C/54/D/456/2011).

25. En su respuesta de 28 de enero de 2020, el Gobierno afirma que el Sr. Al-Shamsi fue arrestado de conformidad con las normas y principios jurídicos de los Emiratos Árabes Unidos, después de haber sido informado del motivo de su arresto y de que se le presentarán sendas órdenes de detención y de registro, que examinó en detalle.

26. Según el Gobierno, el Sr. Al-Shamsi fue puesto a disposición de la fiscalía competente el 15 de noviembre de 2018, y del tribunal competente el 13 de enero de 2020, por haber cometido actos contrarios a la legislación vigente.

27. El Gobierno afirma que el Sr. Al-Shamsi no fue detenido arbitrariamente, recluso en régimen de aislamiento, torturado, maltratado físicamente ni privado de sus derechos personales, sino que fue alojado con otros presos en uno de los establecimientos penitenciarios oficiales. Dicho centro cumplía todas las normas necesarias para garantizar la seguridad de los reclusos en lo que respecta a la alimentación, el medio físico, el aire acondicionado y la ventilación.

28. El Gobierno añade que el Sr. Al-Shamsi ha recibido la atención sanitaria que necesita, pues es tratado periódicamente por médicos que le administran fármacos y realizan otras intervenciones.

29. Por último, el Gobierno sostiene que el Sr. Al-Shamsi ha recibido visitas y llamadas telefónicas de sus familiares, que están permitidas y se rigen por los procedimientos aplicados por la institución penitenciaria.

Otras observaciones de la fuente

30. En su respuesta, la fuente afirma que las pruebas proporcionadas por el Gobierno, o más bien la falta de ellas, corroboran su versión de los hechos relativos a la detención del Sr. Al-Shamsi.

31. En relación con la alegación de arresto arbitrario, la fuente señala que el Gobierno no ha aportado ninguna prueba, como una copia de la orden judicial, para demostrar su afirmación según la cual el Sr. Al-Shamsi fue informado del motivo de su arresto y se le presentaron sendas órdenes de detención y de registro.

32. La fuente señala también que el Gobierno no se ha referido directamente a su alegación según la cual el Sr. Al-Shamsi fue sometido a seis meses de desaparición forzada, que en sí misma constituye una forma de detención arbitraria.

33. Con respecto a la afirmación del Gobierno según la cual el Sr. Al-Shamsi no fue recluso en régimen de aislamiento, la fuente subraya que los documentos proporcionados por el Gobierno demuestran que no tuvo contacto con el mundo exterior durante cinco meses, ya que muestran que no hizo ninguna llamada telefónica hasta el 20 de febrero de 2019, después de que fuera trasladado a un centro de detención oficial, y que no recibió visitas hasta el 31 de enero de 2019, a pesar de que había sido arrestado el 18 de agosto de 2018.

34. Además, la fuente sostiene que el Gobierno no ha aportado pruebas que justifiquen su afirmación de que el Sr. Al-Shamsi no fue recluso en régimen de aislamiento.

35. Según la fuente, el Gobierno ha confirmado en su respuesta que el Sr. Al-Shamsi fue arrestado el 18 de agosto de 2018, pero que no fue puesto a disposición de la fiscalía hasta el 15 de noviembre de 2018, y del tribunal hasta el 13 de enero de 2020. El Gobierno no proporciona ninguna información sobre los cargos imputados al Sr. Al-Shamsi ni ninguna razón que justifique su detención preventiva durante casi un año y medio.

36. Además, la fuente señala que la secuencia temporal de los hechos que describe el Gobierno indica una clara violación del derecho de *habeas corpus* del Sr. Al-Shamsi y de su derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial. Se le privó claramente de su derecho a presentar una reclamación por el prolongamiento de su detención más allá del período legal de 7 días, renovable por otro período no superior a 14 días, con arreglo al artículo 110 del Código de Procedimiento Penal.

37. Además, la fuente indica que el Gobierno no se refiere a su alegación según la cual se negó al Sr. Al-Shamsi el acceso a la asistencia letrada y a la asistencia consular, en violación del artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos, el artículo 36, párrafo 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

38. La fuente añade información sobre hechos recientes; indica que el Sr. Al-Shamsi quedó a disposición judicial el 13 de enero de 2020 y que la primera audiencia del juicio se celebró el 5 de febrero de 2020. No obstante, su abogado no ha podido acceder todavía al expediente de la causa, lo que menoscaba gravemente su derecho a la igualdad de medios.

39. Con respecto a la alegación de torturas y malos tratos, la fuente sostiene que el Gobierno no ha fundado su postura con pruebas. La fuente afirma que, entre la comunicación enviada por el Grupo de Trabajo al Gobierno el 9 de diciembre de 2019 y la respuesta de este de 28 de enero de 2020, el Sr. Al-Shamsi fue torturado para obligarlo a confesar hechos que no había cometido en un vídeo filmado el 7 de enero de 2020. También ha sido hostigado por las autoridades, que lo amenazaron con detener a su madre y sus hermanos si no confesaba.

40. Por último, la fuente afirma que el Gobierno sigue negando el acceso al historial médico del Sr. Al-Shamsi y que su estado de salud sigue siendo preocupante, ya que no ha recibido un tratamiento adecuado.

Deliberaciones

41. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno por la información que le han presentado en relación con la privación de libertad del Sr. Al-Shamsi.

42. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Asimismo, la mera afirmación por el Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

Categoría I

43. El Grupo de Trabajo examinará en primer lugar si se han producido infracciones con arreglo a la categoría I, que se refiere a la privación de libertad sin fundamento jurídico.

44. La fuente sostiene, y el Gobierno no ha fundado su afirmación para refutarlo, que al Sr. Al-Shamsi no se le presentó una orden de detención ni se le informó de los motivos de su arresto por la Dirección de Seguridad del Estado cuando este tuvo lugar, el 18 de agosto de 2018.

45. Como ha señalado el Grupo de Trabajo, para que una privación de libertad tenga un fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice el arresto. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden judicial, lo que no se hizo en el presente caso².

46. El derecho internacional prevé el derecho del detenido a que se le presente una orden de detención para garantizar el control efectivo de una autoridad judicial competente, independiente e imparcial, el cual es indispensable para garantizar el derecho a la libertad y la seguridad de la persona y la prohibición de la privación arbitraria de la libertad en virtud de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los

² Por ejemplo, opiniones núm. 10/2018, párrs. 45 y 46; núm. 36/2018, párr. 40; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 9/2019, párr. 29; núm. 32/2019, párr. 29; núm. 33/2019, párr. 48; núm. 44/2019, párr. 52; núm. 45/2019, párr. 51; y núm. 46/2019, párr. 51.

principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios³. En el presente caso, el Grupo de Trabajo no ha recibido ningún motivo válido, como el arresto en flagrante delito, para justificar una excepción a ese principio.

47. El Grupo de Trabajo considera también que, para establecer el fundamento jurídico de la privación de libertad, las autoridades deberían haber comunicado al Sr. Al-Shamsi los motivos de su arresto en el momento en que este se produjo y haberlo informado sin demora de los cargos que se le imputaban⁴. El hecho de que no lo hicieran constituye una vulneración del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio 10 del Conjunto de Principios, y hace que la detención del Sr. Al-Shamsi carezca de fundamento jurídico⁵.

48. La fuente sostiene además, y el Gobierno no ha fundado su afirmación para refutarlo, que el Sr. Al-Shamsi fue objeto de desaparición forzada y recluido en régimen de incomunicación durante seis meses a partir del 18 de agosto de 2018.

49. El Grupo de Trabajo recuerda que la desaparición forzada constituye una forma particularmente grave de detención arbitraria, ya que sustrae a la persona del amparo de la ley, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁶. En consecuencia, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

50. El Grupo de Trabajo y otros expertos también declararon, en el estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42), que en ningún lugar del mundo se debería permitir que alguien fuese privado de su libertad en secreto, por períodos que podían ser indefinidos, y quedara fuera del alcance de la ley sin la posibilidad de recurrir a procedimientos judiciales, como el recurso de *habeas corpus* (A/HRC/16/47 y Corr.1, párr. 54). De conformidad con la resolución 37/3 del Consejo de Derechos Humanos (párrs. 8, 9 y 16), el Grupo de Trabajo destaca que nadie podrá ser recluido en secreto e insta al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos a que cierre sin demora todos los centros de reclusión secretos.

51. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Al-Shamsi no fue llevado ante un juez sin demora, es decir, en un plazo de 48 horas desde el momento del arresto a menos que concurren circunstancias absolutamente excepcionales, según la norma internacional establecida por el Grupo de Trabajo en su jurisprudencia⁷. Además, la imposición al Sr. Al-Shamsi de la medida de prisión preventiva, que debería ser la excepción y no la regla, carecía de fundamento jurídico, ya que no se basaba en una determinación individualizada de que dicha medida resultara razonable y necesaria, habida cuenta de todas las circunstancias, para los fines especificados en la ley, como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito, examinando si las alternativas, como la fianza, los brazaletes electrónicos u otras medidas, harían que la reclusión fuera innecesaria en el

³ El Grupo de Trabajo ha mantenido desde sus primeros años que la práctica de arrestar a una persona sin una orden judicial convierte su detención en arbitraria. Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 3/2018, párr. 43; núm. 10/2018, párr. 46; núm. 26/2018, párr. 54; núm. 30/2018, párr. 39; núm. 38/2018, párr. 63; núm. 47/2018, párr. 56; núm. 51/2018, párr. 80; núm. 63/2018, párr. 27; núm. 68/2018, párr. 39; y núm. 82/2018, párr. 29. Véase también el artículo 14, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

⁴ Por ejemplo, opinión núm. 10/2015, párr. 34. Véanse también las opiniones núm. 32/2019, párr. 29; núm. 33/2019, párr. 48; núm. 44/2019, párr. 52; núm. 45/2019, párr. 51; y núm. 46/2019, párr. 51.

⁵ Véase también el artículo 14, párrs. 1 y 3, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

⁶ Opiniones núm. 82/2018, párr. 28; núm. 18/2019, párr. 33; núm. 22/2019, párr. 67; núm. 26/2019, párr. 88; núm. 28/2019, párr. 61; núm. 29/2019, párr. 54; núm. 36/2019, párr. 35; núm. 41/2019, párr. 32; núm. 42/2019, párr. 48; núm. 51/2019, párr. 58; y núm. 56/2019, párr. 79. Véase también el artículo 22 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

⁷ Opiniones núm. 11/2019, párr. 63; núm. 20/2019, párr. 66; núm. 26/2019, párr. 89; núm. 30/2019, párr. 30; núm. 36/2019, párr. 36; núm. 42/2019, párr. 49; núm. 51/2019, párr. 59; núm. 56/2019, párr. 80; núm. 76/2019, párr. 38; y núm. 82/2019, párr. 76.

caso concreto⁸. En consecuencia, el Estado ha violado el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 11, 37 y 38 del Conjunto de Principios⁹.

52. El Grupo de Trabajo observa también que al Sr. Al-Shamsi no se le concedió el derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que este decidiese a la mayor brevedad posible sobre la legalidad de su detención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios¹⁰. En los Principios y Directrices Básicos se indica que el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo y su ausencia constituye una violación de los derechos humanos, y que este recurso judicial es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática (A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3). Además, el Grupo de Trabajo observa que la supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal y resulta esencial para garantizar que la detención tenga fundamento jurídico¹¹.

53. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Al-Shamsi carece de fundamento legal y es, por tanto, arbitraria con arreglo a la categoría I.

Categoría III

54. En lo que respecta a la categoría III, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Al-Shamsi no parece haber tenido acceso a un abogado de su elección durante un período de 20 meses que comenzó con su arresto por la Dirección de Seguridad del Estado el 18 de agosto de 2018.

55. En opinión del Grupo de Trabajo, las autoridades no respetaron el derecho del Sr. Al-Shamsi a disponer en todo momento de asistencia letrada, lo que es inherente al derecho a la libertad y la seguridad de la persona y al derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, según lo dispuesto en los artículos 3, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo considera que esta vulneración menoscabó considerablemente la capacidad del Sr. Al-Shamsi para defenderse en cualquier procedimiento judicial posterior. Como afirmó el Grupo de Trabajo en los Principios y Directrices Básicos, las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento de su privación de libertad, en particular inmediatamente después de ser detenidas, y en el momento de la detención deben ser informadas puntualmente de este derecho (principio 9); y el acceso a un abogado no se debe restringir ilegal o injustificadamente (directriz 8). Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha producido una vulneración grave de los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los principios 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios¹².

56. El Grupo de Trabajo observa también que el Gobierno no ha respetado los derechos del Sr. Al-Shamsi, por ejemplo el de ser informado de su derecho a la asistencia consular, establecido en el artículo 36, párrafo 1 b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esta y otras violaciones de los derechos garantizados en el artículo 36, párrafo 1 a), b) y c), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares constituyen vulneraciones graves del derecho a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial, reconocido en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios. De hecho, los padres del Sr. Al-Shamsi avisaron a la Embajada de Omán al día siguiente de su desaparición y el

⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 38. Véase también A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58.

⁹ Véanse también los artículos 14, párrs. 1 y 5, y 23 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

¹⁰ Véanse también los artículos 12, 14, párrs. 1, 5 y 6, y 23 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

¹¹ Opiniones núm. 35/2018, párr. 27; núm. 83/2018, párr. 47; núm. 32/2019, párr. 30; núm. 33/2019, párr. 50; núm. 44/2019, párr. 54; núm. 45/2019, párr. 53; núm. 59/2019, párr. 51; y núm. 65/2019, párr. 64.

¹² Véanse también los artículos 12, 13, párr. 1, y 16, párrs. 2 y 3, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

personal consular omaní trató de visitarlo y de acceder a él, pero el Gobierno rechazó su solicitud. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes para que adopte las medidas oportunas.

57. El Grupo de Trabajo observa además que se negó al Sr. Al-Shamsi el derecho a ser visitado por sus familiares y mantener correspondencia con ellos y a tener oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho, de conformidad con los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios y las reglas 43, párrafo 3, y 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)¹³.

58. En opinión del Grupo de Trabajo, la detención preventiva del Sr. Al-Shamsi, durante 20 meses hasta la fecha, ha menoscabado la presunción de inocencia garantizada en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 36, párrafo 1, del Conjunto de Principios¹⁴. Además, no cabe justificación alguna para la prolongada detención preventiva durante 20 meses sin perspectivas de que se celebre el juicio, período durante el cual el Sr. Al-Shamsi ha permanecido privado de libertad, lo que constituye una vulneración manifiesta del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, garantizado en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁵. Todavía no se le ha informado de los cargos que se le imputan¹⁶.

59. El Grupo de Trabajo expresa también su gran preocupación por la alegación, a primera vista creíble, de que el Sr. Al-Shamsi fue torturado durante la detención preventiva, pues le propinaron palizas, lo hostigaron, lo amenazaron, le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron las uñas, le denegaron alimentos y le impidieron dormir durante períodos prolongados. El reconocimiento médico de 21 de enero de 2020 no refuta de manera fiable las alegaciones de tortura durante los 16 meses anteriores para obligar al Sr. Al-Shamsi a confesar hechos que lo incriminaban a él y a su tío. El Gobierno tampoco ha ofrecido explicación alguna para refutar la alegación de que su familia fue amenazada.

60. Con respecto a la reclusión del Sr. Al-Shamsi en régimen de aislamiento, el Grupo de Trabajo recuerda que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha considerado que el régimen de aislamiento prolongado, es decir, el que excede de 15 días, en el que algunos de los efectos psíquicos nocivos del aislamiento pueden hacerse irreversibles (A/63/175, párr. 56, y A/66/268, párr. 61)¹⁷, o la reclusión prolongada en régimen de incomunicación en un lugar secreto (A/56/156, párr. 14) pueden equivaler a tortura, tal como se describe en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura.

61. El Grupo de Trabajo observa que las autoridades competentes no solo no realizaron una investigación pronta e imparcial de las denuncias de tortura, sino que tampoco tomaron medidas para impedir que las declaraciones extraídas mediante torturas se utilizaran en el juicio del Sr. Al-Shamsi y en el de su tío. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que adopte las medidas oportunas.

62. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que, tras realizar una visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos en 2014, la entonces Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados señaló que el actual mecanismo por el que los jueces, incluidos el Presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Federal, eran nombrados por los más altos representantes del poder ejecutivo no era transparente y podía exponer a los jueces a presiones políticas indebidas (A/HRC/29/26/Add.2, párr. 53)¹⁸.

¹³ Opiniones núm. 35/2018, párr. 39; núm. 44/2019, párrs. 74 y 75; y núm. 45/2019, párr. 76.

¹⁴ Véase también el artículo 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

¹⁵ Véase también el artículo 13, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

¹⁶ Véanse también los artículos 14, párr. 3, y 16, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

¹⁷ Asimismo, en la regla 44 de las Reglas Nelson Mandela se define el aislamiento prolongado como aquel que se extiende durante un período superior a 15 días consecutivos.

¹⁸ Opiniones núm. 21/2017, párr. 48, y núm. 76/2017, párr. 76.

63. El Grupo de Trabajo considera que la fuente presentó alegaciones creíbles de que se ha violado la prohibición absoluta de la tortura, consagrada en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 2, párrafo 1, y 16, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura¹⁹ 20. El hecho de que el Gobierno no haya adoptado medidas correctivas también constituye una infracción de los artículos 12, 13 y 14, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura²¹, así como del principio 33 del Conjunto de Principios. En consecuencia, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que lo examine más a fondo.

64. El Grupo de Trabajo recuerda además que la tortura menoscaba las garantías mínimas necesarias para la defensa de la persona, especialmente teniendo en cuenta el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, reconocido en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La utilización de una confesión obtenida mediante tortura contraviene también el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y el principio 21 del Conjunto de Principios²².

65. El Grupo de Trabajo expresa su gran preocupación por el empeoramiento del estado físico y psicológico del Sr. Al-Shamsi, que tiene un tumor maligno en el riñón que le queda. En consecuencia, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y al Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad para que lo examinen más a fondo.

66. En vista de cuanto antecede, el Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad del Sr. Al-Shamsi carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

Observaciones adicionales

67. El Grupo de Trabajo desea hacer algunas observaciones acerca de otras graves alegaciones formuladas en el presente caso, en concreto el hostigamiento de que fue víctima la familia del Sr. Al-Shamsi en relación con su privación de libertad. En septiembre de 2018, mientras el Sr. Al-Shamsi seguía siendo objeto de una desaparición forzada en un lugar secreto, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de sus padres y confiscaron un viejo teléfono móvil y la computadora portátil del estudiante. Como el Gobierno no se refirió a estas alegaciones, en principio creíbles, de la fuente, el Grupo de Trabajo las considera probadas. En ninguna circunstancia es aceptable que se someta a los familiares de una persona detenida a ese tipo de hostigamiento.

68. A lo largo de sus 29 años de historia, el Grupo de Trabajo ha concluido que los Emiratos Árabes Unidos habían incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en al menos 26 casos²³. El Grupo de Trabajo considera que esto podría ser indicativo de que los Emiratos Árabes Unidos tienen un problema sistémico de detención arbitraria, que constituye una grave vulneración del derecho internacional. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras formas graves de privación de libertad que vulneran las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad²⁴.

¹⁹ Véase también el artículo 8, párr. 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

²⁰ Véanse también los principios 1 y 6 del Conjunto de Principios y la regla 1 de las Reglas Nelson Mandela. En particular, el régimen de aislamiento prolongado vulnera las reglas 43 a 45 de las Reglas Nelson Mandela.

²¹ Véase también el artículo 8, párr. 2, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

²² Véanse las opiniones núm. 48/2016, núm. 3/2017, núm. 6/2017, núm. 29/2017 y núm. 39/2018.

²³ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 47/2017, núm. 58/2017, núm. 76/2017, núm. 30/2018, núm. 28/2019 y núm. 55/2019.

²⁴ A/HRC/13/42, párr. 30. Véanse también, por ejemplo, las opiniones núm. 68/2018, párr. 60; núm. 73/2018, párr. 69; núm. 82/2018, párr. 53; núm. 83/2018, párr. 68; y núm. 87/2018, párr. 80.

Decisión

69. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Abdullah Awad Salim al-Shamsi es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I y III.

70. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Al-Shamsi sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

71. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Al-Shamsi inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y de la amenaza que supone en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la inmediata liberación del Sr. Al-Shamsi.

72. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Al-Shamsi y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

73. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que tomen las medidas correspondientes.

74. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

75. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Al-Shamsi persona y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Al-Shamsi;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Al-Shamsi y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de los Emiratos Árabes Unidos con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

76. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

77. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

78. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁵.

[Aprobada el 1 de mayo de 2020]

²⁵ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.